



WRM BOLETIN

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales



número 135 - Octubre 2008

NUESTRA OPINIÓN

- 16 de octubre: Día Mundial de la Soberanía Alimentaria

SOBERANIA ALIMENTARIA vs. AGROCOMBUSTIBLES

- Vía Campesina: la soberanía alimentaria como alternativa popular contra la agroindustria destructora
- Colombia: palma "maquillada de verde" aumenta amenaza a soberanía alimentaria y derechos humanos
- Por qué la certificación de los agrocombustibles no funcionará

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Ghana: Newmont Mining Corp. hace peligrar el Bosque Ajenjua Bepo y las comunidades vecinas
- India: la Policía y el Departamento Forestal atacan a mujeres que defienden sus tierras
- México: masacre contra indígenas y campesinos que resguardaban autónomamente sus territorios

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Brasil: pescadores afectados por Aracruz Celulosa cierran puerto privado de la empresa
- Indonesia: los impactos de una fábrica de celulosa sobre la salud de la población local
- Malasia: niños y trabajadores inmigrantes indonesios esclavizados en plantaciones de palma aceitera

NUESTRA OPINIÓN

- 16 de octubre: Día Mundial de la Soberanía Alimentaria

El modelo de desarrollo económico promovido desde los centros de poder ya ha mostrado a las claras que lleva al desastre social y ambiental, tanto a nivel local como en el plano global. El cambio climático es el ejemplo más claro en lo ambiental, en tanto que la creciente escasez de alimentos que sufren millones de personas lo demuestra a nivel social.

Las políticas globales no solo no hacen nada para resolver los problemas, sino que los agravan. No por ignorancia, sino por designio. El resultado es la apropiación de más y más recursos por parte de empresas transnacionales cada vez más grandes y poderosas. La semilla, el agua, el suelo, la biodiversidad, pasan a ser propiedad de dichas empresas y las poblaciones locales son despojadas de los recursos que aseguran su sustento. Algunos ejemplos en ese sentido son los siguientes:

- La agricultura familiar –productora de una amplia variedad de alimentos- es destruida para dar lugar a la producción industrial de un solo producto, usualmente no destinado a la alimentación humana y normalmente para exportación.
- Enormes áreas de tierras agrícolas y ganaderas son destinadas a la producción de madera para celulosa (eucaliptos, pinos) o de agrocombustibles (maíz, palma aceitera, caña de azúcar, jatrofa).
- Los manglares -fuente de vida para miles de pobladores locales- son destruidos para dar lugar a la producción industrial de camarones para exportación.
- El madereo comercial no solo afecta la disponibilidad de alimentos y otros recursos de los que dependen las poblaciones locales, sino que es la punta de lanza para la sustitución del bosque por monocultivos para exportación (soja, palma aceitera, caucho).
- La explotación petrolera y minera contaminan el agua, el aire y los recursos de los que se alimentan las poblaciones locales (pesca, caza, recolección).
- Las grandes represas hidroeléctricas expulsan poblaciones enteras y destruyen los recursos alimenticios de los que dependen miles de personas que habitan en el área afectada.

Nada de eso es casual y las decisiones son tomadas con plena conciencia de los impactos que conllevan. Bajo el manto del discurso del “desarrollo sustentable” se lleva a cabo la destrucción a gran escala de la naturaleza y de todos los recursos que hasta entonces aseguraban la soberanía alimentaria de las poblaciones locales.

El divorcio entre las necesidades de las grandes mayorías y las políticas globales es cada vez más profundo. Mientras los pueblos claman por alimentos suficientes en cantidad y adecuados en calidad, los gobiernos abren las puertas a inversiones extranjeras que profundizan el proceso de apropiación y destrucción de los recursos. Como resultado, la población de países ricos en recursos naturales es despojada de sus recursos, se vuelve cada vez más pobre y pasa a sufrir hambre y desnutrición.

Para colmo, hasta los problemas más graves –como por ejemplo el cambio climático- son percibidos desde el poder económico como “oportunidades de negocios” y son tratados como tales. Es así como se ha desarrollado un científicamente absurdo pero económicamente muy redituable “mercado de carbono”, en el que destructivos monocultivos de árboles son publicitados como positivos “sumideros de carbono”, donde se negocia por dólares la conservación o destrucción de bosques, donde se promueven los duramente cuestionados agrocombustibles como la tabla de salvación de la humanidad, donde se vuelve posible lo imposible: que la quema de petróleo se pueda “compensar” y que las personas y empresas puedan volverse “neutras en carbono” mediante un simple pago de dinero a hábiles empresarios del mercado de carbono.

Frente a todo este panorama son muchas las luchas que se levantan buscando alternativas reales para enfrentar la creciente catástrofe social y ambiental que las grandes empresas han impuesto a la humanidad. Muchas de ellas se están unificando bajo la bandera de la soberanía alimentaria, que apela a la sensatez de destinar las tierras a satisfacer las necesidades alimentarias de la gente, que promueve la agricultura familiar y cooperativa como la base de la producción de alimentos, que impulsa un comercio enfocado en lo local, que plantea la conservación de los recursos mediante prácticas agrícolas, ganaderas y forestales adecuadas. Que apela, en definitiva, a la justicia social basada en un uso responsable de la naturaleza.

En este 16 de octubre hacemos entonces un llamado conjunto a tod@s para que esta fecha sirva para unificar aún más luchas para defender y promover la Soberanía Alimentaria de los pueblos.

Vía Campesina - Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

[inicio](#)

SOBERANÍA ALIMENTARIA vs. AGROCOMBUSTIBLES

- **Vía Campesina: la soberanía alimentaria como alternativa popular contra la agroindustria destructora**

Vía Campesina es un movimiento internacional e intercultural que coordina diferentes organizaciones nacionales y regionales de pequeñ@s agricultor@s, campesin@s, campesin@s sin tierra, trabajador@s agrícolas, pueblos indígenas, pescador@s, inmigrantes y personas que trabajan en actividades artesanales.

Este movimiento autónomo, multicultural, multiétnico y pluralista trabaja básicamente para lograr cambios en la producción agrícola, los hábitos de consumo, el rol de la mujer, la educación, la salud, el medio ambiente, entre otros. Los temas centrales de La Vía Campesina se han enriquecido a través de la visión cósmica de los pueblos indígenas, los cuales preservan la madre tierra contra los desastres naturales, el calentamiento global y la crisis ecológica provocada por el creciente capitalismo desenfrenado.

La organización ha ido introduciendo el concepto de la soberanía alimentaria, a tal punto que ahora es uno de los principales temas de discusión en las políticas agrícolas y alimentarias. La soberanía alimentaria es el derecho de las personas y los gobiernos a elegir la forma en que se producen y consumen los alimentos respetando nuestros medios de subsistencia, así como las políticas que apoyan esta elección.

Sin embargo, la agricultura y la producción de alimentos están dominadas actualmente por empresas transnacionales cuyo modelo de producción industrial busca la total integración vertical y el dominio y el control absolutos sobre los alimentos y la agricultura, desde la semilla hasta el plato, para lograr enormes ganancias. Esta situación explota a los trabajadores, concentra el poder económico y político y destruye las comunidades rurales.

La soberanía alimentaria requiere que los alimentos no sean comercializados como una mera mercancía con el fin de obtener ventajas políticas y económicas, y que la base de la producción de alimentos (la biodiversidad, la tierra y el agua) no sea destruida, degradada, usada o apropiada a expensas de otros pueblos u otras naciones. Una reforma agraria genuina debería garantizar a todos el derecho a trabajar la tierra, y democratizar su propiedad dando prioridad a las formas familiares, sociales y cooperativas de agricultura.

Enfrentados al drama actual del calentamiento global, a menudo se promueven falsas soluciones (como los agrocombustibles producidos a partir de monocultivos, incluidas las plantaciones de árboles), que socavan la soberanía alimentaria.

De hecho, la agricultura industrial es uno de los principales generadores del calentamiento global y el cambio climático, transportando los alimentos por todo el mundo, imponiendo formas industriales de producción (mecanización, intensificación, uso de agroquímicos, monocultivos...), destruyendo la biodiversidad y su capacidad de capturar carbono, convirtiendo la tierra y los bosques en zonas no aptas para la agricultura, transformando la agricultura de productora de energía en consumidora de energía.

El "paquete" del agrocombustible viene envuelto en el modelo agroindustrial impuesto por las empresas transnacionales que ven esto como una oportunidad más para incrementar sus ganancias y su control, mientras destruyen los medios de subsistencia de los

campesinos.

Los elementos básicos necesarios en abundancia para producir agrocombustibles a gran escala son la tierra, el agua y el sol. Por este motivo, las empresas se volcaron inmediatamente al hemisferio sur, sobre todo a los países cercanos a los trópicos y a los que tienen abundante tierra. En muchos países, esta expansión del área cultivada por los agrocombustibles ha abarcado zonas dedicadas a cultivos alimenticios y a ganado lechero. La posibilidad de ganar mucho dinero sedujo a los capitales extranjeros, que están comprando tierras y expandiendo los monocultivos a gran escala en los países del Sur (como los "desiertos verdes" de eucaliptos y pinos en Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, Sudáfrica, Suazilandia, Tailandia y otros, y las plantaciones de palma aceitera en Colombia, Camerún, Camboya, Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, etc.), provocando así una gran concentración de la propiedad y un proceso de desnacionalización de la propiedad de la tierra.

En lo relativo al medio ambiente, la forma de producción del monocultivo, basada en agrotóxicos, afecta seriamente al medio ambiente, destruye la biodiversidad existente, afecta la pluviosidad y también agrava el calentamiento climático. Tanto la "primera generación" de agrocombustibles, basada en diferentes formas de azúcares obtenidos de los cultivos, como la "segunda generación", basada en la celulosa de la madera (incluidos los árboles genéticamente modificados que plantean un riesgo adicional al medio ambiente), aumentan el control corporativo y destruyen la diversidad biológica existente, contribuyendo al desequilibrio y al calentamiento global.

Además de generar mayores problemas para los países productores, la producción industrial de agrocombustibles revivirá los sistemas coloniales de plantación y el trabajo esclavo e incrementará seriamente el uso de agroquímicos, además de contribuir a la deforestación y la destrucción de la diversidad biológica. La producción intensiva de agrocombustibles no resolverá el problema del calentamiento global; tampoco resolverá la crisis del sector agrícola. Una vez más, los impactos se harán sentir sobre todo en los países en desarrollo, ya que los países industrializados no podrán cubrir su propia demanda de agrocombustibles y deberán importar enormes cantidades desde el Sur.

Vía Campesina cree que las soluciones a la crisis actual deben surgir de los actores sociales organizados que están desarrollando modos de producción, comercio y consumo basados en la justicia y la solidaridad y en comunidades saludables. Ninguna solución tecnológica resolverá el actual desastre social y ecológico mundial.

Un conjunto de soluciones verdaderas debería incluir:

- * La agricultura a pequeña escala, que utiliza mucha mano de obra y muy poca energía, y que puede realmente contribuir a detener y revertir los efectos del cambio climático.
- * Una verdadera reforma agraria que fortalezca la agricultura en pequeña escala, promueva la producción de alimentos como principal uso de la tierra, y considere los alimentos como un derecho humano básico que no debería tratarse como una mercancía.
- * La producción local de alimentos que pondrá fin al transporte innecesario de alimentos y garantizará que todo lo que llegue a nuestra mesa sea seguro, fresco y nutritivo.
- * La modificación de los modelos de producción y consumo que promueven el despilfarro y el consumo innecesario por parte de una fracción minoritaria de la humanidad, mientras que cientos de millones de personas aún sufren hambre y privaciones.

Por consiguiente, Vía Campesina exige:

- El desmantelamiento total de las empresas agroindustriales que están robando la tierra de los pequeños productores, produciendo comida chatarra y generando desastres ambientales.
- El reemplazo de la agricultura y la ganadería industrializadas por la agricultura sustentable a pequeña escala, apoyada por programas genuinos de reforma agraria.
- La prohibición de todas las formas de tecnología –como la manipulación genética– que ponen en peligro los recursos naturales.
- La promoción de políticas energéticas sanas y sustentables. Esto supone un menor consumo de energía y la descentralización de la

energía, en lugar de promover la producción de agrocombustibles a gran escala, como es el caso actualmente.

- La aplicación de políticas agrícolas y comerciales a nivel local, nacional e internacional, que apoyen la agricultura sustentable y el consumo de alimentos locales. Esto incluye la prohibición de las subvenciones que dan lugar a la saturación de los mercados con alimentos a bajo precio.

Artículo producido por WRM en base a materiales de la Via Campesina

[inicio](#)

- Colombia: palma “maquillada de verde” aumenta amenaza a soberanía alimentaria y derechos humanos

Parece una bofetada. La agroindustria de la palma aceitera ha escogido precisamente el 16 de octubre, Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, y al país de América Latina más golpeado por la palma aceitera –Colombia- para celebrar la Primera Reunión Latinoamericana de la “Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable” (RSPO).

Se trata de un intento de los grupos palmicultores --ahora en auge por la posibilidad de destinar su producto a la producción de agrocombustible-- por adquirir la certificación de la Mesa. Buscan un “maquillaje verde” que les permita sortear la publicidad negativa que han recibido los agrocombustibles con relación a la crisis alimentaria y por su cosecha de dolor y sangre con las terribles violaciones de los derechos humanos de las comunidades colombianas.

El rotundo rechazo de las organizaciones sociales y ambientales colombianas a los intentos de expansión de los monocultivos de palma denuncia que, lejos de dar solución a la crisis climática, lo que éstos provocan es “que las tierras ya no se dedicarán a producir alimentos y por tanto crearán una mayor dependencia alimentaria de los pueblos con respecto a grandes multinacionales. Vastas extensiones de tierra se ocupan con plantaciones de las que provendrán los agrocombustibles; selvas tropicales se deforestan para plantar miles de hectáreas con palma aceitera, caña de azúcar y otros cultivos.” “En no pocos casos, las plantaciones de palma se expanden sobre los territorios de comunidades desplazadas” a fuerza de represión, muerte y miseria. (La declaración está disponible en: http://www.wrm.org.uy/temas/Agrocombustibles/Declaracion_Colombia_RSPO.pdf)

Pero no es únicamente en Colombia donde existen pruebas de los graves impactos de los monocultivos de palma aceitera. Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Camerún, Uganda, Costa de Marfil, Camboya, Tailandia, Ecuador y otros pueden dar testimonio de lo que aquéllos acarrear: la violación del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, violaciones de los derechos humanos, apropiación ilegal de territorios, deforestación de bosques tropicales, aumento del cambio climático, la amenaza que suponen para millones de indígenas, los conflictos por la tenencia de tierra, el aumento del uso de agrotóxicos, por citar algunos impactos, mencionados en una declaración internacional impulsada por la Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado, en contra de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible y en apoyo a las organizaciones colombianas (http://www.wrm.org.uy/temas/Agrocombustibles/Declaracion_Internacional_RSPO.html).

La declaración internacional surgió a partir del Encuentro Territorio y Vida celebrado en Udine, Italia, en setiembre de este año, donde se trabajó en torno a diversas temáticas con el denominador común de la imposición de modelos de sociedad y economía que destruyen a los pueblos, afectan profundamente el ambiente, convierten a los territorios de vida en territorios de muerte, de tortura, de negación de los derechos y de transformación del ser en mercancía. Los monocultivos de palma se denunciaron como una de las expresiones de ese saqueo de los intereses comerciales que explota los ecosistemas y recursos naturales para alimentar el consumo y el bienestar social de una parte muy pequeña de la humanidad –básicamente en el Norte- y privan a una parte importante de la humanidad de las condiciones mínimas de supervivencia. Se invita a adherir a la declaración enviando un mensaje con el nombre y el país de la organización a la dirección: unsustainablepalmoil@gmail.com.

La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable “es un instrumento de expansión del negocio de la palma y no una estrategia auténtica para contener sus impactos ambientales y sociales. Muchas de las empresas miembros de la RSPO siguen destruyendo grandes zonas de selva húmeda y violando derechos humanos, como es el caso de Wilmar International en la Isla de Bugala (Uganda), PT SMART, Agro Group e IOI Group en Indonesia, FEDEPALMA en Colombia, Unilever en Indonesia, Malasia y Costa de Marfil”, denuncia la declaración. Se silencian “los graves crímenes, las irregularidades y el control paramilitar relacionados con el

agronegocio de la palma aceitera”.

Básicamente, un argumento de peso para rechazar la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable es que los principios y criterios que propone la RSPO para la definición de sostenibilidad incluyen a las plantaciones a gran escala; el monocultivo de palma aceitera, “como todos los monocultivos agroindustriales, NO ES ni puede ser NUNCA sostenible”.

Lo que se necesita es un cambio, un cambio radical en la forma “de producir, transformar, comercializar y consumir productos agrarios y ganaderos”, para lo cual es necesario, entre otras cosas: detener la producción industrial de alimentos que está contribuyendo al cambio climático y a la destrucción de las pequeñas comunidades rurales; acabar con la privatización de los recursos naturales; desmantelar las empresas de agronegocios, la especulación financiera con las materias primas y las políticas económicas y comerciales responsables de la crisis (y emergencia) alimentaria; reemplazar la agricultura industrializada por la agricultura campesina y familiar sustentable apoyada por verdaderos programas de reforma agraria; consumir menos energía y producir localmente energía solar y eólica y biogás en lugar de promocionar los agrocombustibles a gran escala; implementar políticas de agricultura y comercio a nivel local, nacional e internacional que apoyen a la agricultura campesina sostenible y al consumo de alimentos locales y ecológicos, lo que incluye la abolición total de las subvenciones que llevan a la competencia desleal mediante los alimentos subsidiados.

Las organizaciones colombianas, por su parte, reclaman “El cese de la expansión de las plantaciones de palma y del procesamiento de materias primas para agrocombustibles en tierras de comunidades locales, que se destinan para el abastecimiento de mercados y consumos insustentables, a costa de sacrificar nuestro patrimonio y territorios”. Piden, en cambio “Una política rural que permita que las comunidades locales permanezcan en sus territorios y se fortalezcan sus formas tradicionales de producción y soberanía alimentaria”. Para ello es necesario “El reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades locales sobre sus territorios y patrimonio, así como por la reparación de las víctimas del modelo agroindustrial de la palma aceitera en el país”.

Sobre la hora de publicar este boletín recibimos la triste noticia de otra víctima: el 14 de octubre, un líder comunal de la zona de Curvaradó, WALBERTO HOYOS RIVAS, fue muerto a balazos por paramilitares que sirven a los grupos de agroindustriales que procuran apropiarse de las tierras comunales para expandir sus plantaciones de palma aceitera en la zona.

Por: Raquel Nuñez, WRM, email: raquelnu@wrm.org.uy, en base al texto de las declaraciones

[inicio](#)

- Por qué la certificación de los agrocombustibles no funcionará

Los argumentos a favor de la certificación a menudo explican que una empresa que desea vender sus productos como producidos de manera sustentable tiene que probarlo de alguna manera. Un consumidor que desea comprar productos social y ambientalmente inocuos necesita una etiqueta que le diga que son confiables. Cuando el problema se presenta de esta manera, la certificación parece ser la respuesta obvia. Pero la certificación de los productos derivados de la madera ofrece tres lecciones que es importante tener en cuenta a la hora de evaluar si la certificación de los agrocombustibles puede ayudar a prevenir los peores excesos de una industria destructiva.

En primer lugar, el sistema de certificación debe ser creíble. Las normas deben ser claras e interpretarse de manera coherente por certificadores independientes. Para impedir un conflicto de intereses en la evaluación es necesario que no haya una relación comercial entre el certificador y la empresa que está siendo certificada. En el sector de la madera ningún sistema de certificación ha logrado esos requisitos básicos.

Es necesario rastrear los productos desde el lugar en el que se plantaron hasta donde se venden. Los problemas de establecer un control riguroso de la cadena de custodia para los productos de la madera fueron señalados en un informe elaborado en 2007 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Parte del problema, señala la OCDE, es que “la madera se transforma en numerosos productos diferentes y proviene de numeras especies de madera diferentes y tiene varios orígenes y propietarios”. Las astillas de madera con las que las fábricas de papel procesan su producto, por ejemplo, pueden provenir de una

amplia gama de fuentes (del raleo de miles de operaciones forestales diferentes, de los residuos de aserraderos o de sistemas de reciclaje). Con el objeto de adecuarse a la industria, en 2004 el FSC (Consejo de Manejo Forestal) modificó su certificación de la cadena de custodia. El nuevo sello del FSC, "fuentes mixtas", permite que su logo aparezca en productos que contienen apenas un 10% de material certificado por el FSC.

Un sello que garantiza que apenas un pequeño porcentaje del producto proviene de fuentes bien manejadas, que no indica el porcentaje que está verdaderamente certificado y que depende de las empresas para confirmar si el resto proviene o no de monocultivos destructivos o bosques deforestados, engaña a los consumidores.

La segunda lección es que aún cuando pudiera crearse un sistema de certificación perfecto (lo cual hasta ahora no ha ocurrido), no hay nada que impida a una industria crear un sistema propio de certificación mucho más laxo. FSC, PEFC, CSA, SFI, AFS, MTCC, LEI, CERFLOR, Certfor – como lo revela esta sopa de letras, eso es precisamente lo que ha ocurrido con la certificación de los productos forestales. Las ONG que han dedicado los últimos quince años a dilucidar los pros y contras de los diversos sistemas pueden darse cuenta de la diferencia entre unos y otros. Los consumidores no.

Tercero, si bien un sistema de certificación voluntario puede recompensar a las empresas que cumplen sus normas otorgándoles un "sello verde", la certificación no puede hacer nada para impedir que las peores compañías continúen sus actividades destructivas. En teoría, si un consumidor sólo compra agrocombustibles que estén creíblemente certificados como provenientes de operaciones bien manejadas, entonces ese consumidor evitará comprar productos que provengan de plantaciones de monocultivos extensos, inundados de productos químicos. Pero comprar agrocombustible certificado no impide la destrucción, porque un consumidor que compre productos certificados no impide que otros compren productos no certificados.

No existen pruebas de que algunas de esas lecciones de la certificación de productos de la madera se apliquen en la certificación de los agrocombustibles. La Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles, dirigida por la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, en Suiza, está elaborando "normas de sostenibilidad para biocombustibles sostenibles" y actualmente invita a hacer comentarios a la "Versión Cero" de su norma preliminar. Sentado en el Directorio está Heiko Liedeker, quien fue director del FSC de 2001 a 2008. Liedeker ignoró sistemáticamente los informes del WRM y otras ONG que explicaban cómo la certificación de plantaciones industriales de árboles por parte del FSC debilitaba las luchas locales. Entre otros miembros del Directorio figuran representantes de empresas petroleras: Cameron Rennie de BP, Julio César Pinho de Petrobras y Paloma Berenguer de Shell.

Participar en una discusión sobre el contenido de los principios y criterios para la certificación de los agrocombustibles podría parecer algo importante de hacer. Si la norma es lo suficientemente débil permitirá la certificación de casi cualquier plantación de agrocombustibles. Pero participar en la redacción de las normas equivale a no entender el asunto. Las normas no harán nada para impedir los abusos cometidos por las peores empresas de plantaciones de agrocombustibles. La Mesa sobre Biocombustibles Sostenibles abrirá un camino para que Europa y América del Norte aduzcan que su demanda de agrocombustibles de alguna manera es sostenible. Es poco más que una hoja de parra que les permite seguir como siempre.

Las discusiones sobre los "agrocombustibles sostenibles" nos distraen del trabajo para lograr formas genuinas de reducción de las emisiones de carbono, como sería exigir legislaciones firmes sobre eficiencia energética e inversiones estatales importantes en el mejoramiento de las normas de construcción, el transporte público, las actuales redes eléctricas directas de alto voltaje y la energía solar y eólica.

Tratar de persuadir a los consumidores a que compren "agrocombustibles sostenibles" podría sonar como un pequeño primer paso hacia otros mayores, que finalmente conduzcan a un cambio real. Pero la realidad es que la certificación de combustibles ayuda a maquillar de verde una industria altamente destructiva e impide que se trabaje en los cambios estructurales que urge aplicar.

Por Chris Lang, <http://chrislang.org>

[inicio](#)

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Ghana: Newmont Mining Corp. hace peligrar el Bosque Ajenjua Bepo y las comunidades vecinas

La compañía estadounidense Newmont Mining Corporation, una de las mayores productoras de oro del mundo, planea ubicar una mina de oro a cielo abierto dentro de la Reserva del Bosque Ajenjua Bepo, en el Distrito Birim North de la región oriental de Ghana.

La organización "No Dirty Gold" (No al oro sucio) informa que la mina proyectada ocuparía una superficie de 1,65 millas (2,6 km) de largo por media milla (0,8 km) de ancho, y crearía montañas de desechos de 60-100 metros de altura. La mina destruiría unos 183 acres (74 ha) del bosque de la reserva.

La minería es una actividad a corto plazo que tiene efectos a largo plazo; cuando se realiza en zonas boscosas, es un factor de destrucción y de degradación del bosque desde la fase de prospección (cuando se abren los caminos de acceso, se construyen campamentos y demás instalaciones y se efectúan tareas geofísicas) hasta la fase de explotación, donde se elimina gran cantidad de vegetación, con lo cual se afecta no sólo el hábitat de cientos de especies sino el mantenimiento de un flujo constante de agua desde el bosque hacia otros ecosistemas y centros urbanos.

Se genera un vertedero de material ácido tóxico que se perpetúa por sí mismo y que puede durar cientos o incluso miles de años. Además, se separan se desprenden pequeñas partículas de metales pesados y el viento las dispersa, de modo que aterrizan en el suelo o en los lechos de los cursos de agua, donde se integran lentamente a los tejidos de organismos vivos, como los peces.

El agua se ve afectada en muchas formas: por la erosión y la sedimentación que resultan de la excavación, por el drenado de materiales ácidos que la contaminan, por la destrucción del bosque que altera el régimen de lluvias.

El bosque Ajenjua Bepo es de importancia crítica para varias comunidades vecinas, que temen que el proyecto las desplace o arruine los cultivos de los cuales dependen. Según No Dirty Gold, los grupos comunitarios de la zona, "entre los que se cuenta la Asociación de Agricultores Afectados de New Abriem, han protestado contra el plan minero de Newmont y contra la compensación insuficiente que les fuera ofrecida a cambio de arruinar sus tierras y medios de vida. Reunieron más de 200 firmas para una petición dirigida al gobierno del país. 'Hemos pasado noches en vela pensando en el trauma de la reubicación, la pérdida de tierras agrícolas y de ingresos, las nuevas enfermedades y, en particular, el recrudecimiento de los casos de malaria como resultado de los pozos abiertos y de los charcos de agua estancada en las zanjas que Newmont Ghana Gold Limited abrirá en la zona', dijo Akosua Nsia de la comunidad Yayaaso, una de las que se encuentran directamente en la zona que impactará la mina". (1)

El apoyo internacional llegó bajo la forma de más de 6.000 firmas provenientes de más de 50 países del mundo entero; en la petición, "se insta al gobierno de Ghana a no dejarse convencer por ninguna empresa minera que pida permiso para excavar minas en el Bosque Ajenjua Bepo ni en ningún otro bosque del país". (2)

Los firmantes denuncian que, si se permite la excavación minera en el Bosque Ajenjua Bepo, más de mil personas serán desalojadas de sus hogares y al menos 8.000 perderán sus tierras. "La información disponible sobre los impactos probables indica que la mina tendrá graves consecuencias para la biodiversidad, la cubierta boscosa, la calidad del agua y las comunidades. Más de un cuarto del bosque de la Reserva será destruido, así como el hábitat de muchas especies vulnerables y amenazadas, y los desechos y productos químicos tóxicos pondrán en peligro el aprovisionamiento de agua. Miles de personas e importantes sitios culturales serán desplazados".

Este proyecto minero llega luego de que la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa de Ghana (CHRAJ) expusiera un sombrío panorama sobre los impactos de las minas en un informe que aporta evidencias de "violaciones generalizadas de los derechos humanos de miembros de las comunidades y de los derechos colectivos de las comunidades" y de "contaminación generalizada de las fuentes de agua de las comunidades, privación y pérdida de medios de subsistencia". (3)

(1) Akyem Proposed Mine, Ghana, No Dirty Gold, <http://www.nodirtygold.org/ghanaakyem.cfm>.

(2) Ghana: 6,000 Signatures Against Mining Concession, Selorm Amevor, Public Agenda, http://www.ghanaweb.com/public_agenda/article.php?ID=11743.

(3) The State of Human Rights in Mining Communities in Ghana, <http://www.nodirtygold.org/HumanRightsInGhanaMiningCommunities.pdf>.

- India: la Policía y el Departamento Forestal atacan a mujeres que defienden sus tierras

En un nuevo incidente, las mujeres tribales y dalit de la aldea de Harna Kachar, distrito de Sonbhadra de Uttar Pradesh, sufrieron una serie de atrocidades cometidas por la policía y el Departamento Forestal.

Un grupo de más de 300 personas integrantes de la Policía, del Departamento Forestal, Aduanas y los sectores dominantes de la aldea participó en el ataque, en el cual resultaron heridas más de 20 mujeres. Las golpearon despiadadamente con palos, saquearon sus pertenencias – ropas, utensilios, granos, bicicletas, ganado, etc. –, e incendiaron un centenar de sus cabañas. Esta atrocidad fue cometida contra mujeres tribales y dalit pese a la histórica ley de los derechos sobre los bosques aprobada en 2006.

En el transcurso de tan sólo un mes éste es un nuevo incidente entre castas, instigado por el Departamento Forestal y la Policía para que la población tribal no pueda organizarse y luchar por los derechos territoriales perdidos. En agosto de 2008, más de 300 cabañas fueron arrasadas al ser incendiadas por un grupo de una casta llamada yadavs, por instigación del Departamento Forestal y de la Policía. El Magistrado del Distrito adoptó medidas severas y los yadavs fueron arrestados por infringir la Ley de Castas y Tribus Registradas. La policía y el Departamento Forestal estaban ansiosos por vengarse de esa derrota.

El enfrentamiento con las mujeres se ha dado desde que la Policía y el Departamento Forestal comenzaron a presionarlas para expulsar a la población tribal de unas 60 hectáreas de tierras que ocupa y reivindica como propias. En uno de esos enfrentamientos, un policía arrebató a una mujer su sari (el vestido típico de las mujeres indias). Un periódico publicó que las mujeres se encolerizaron y, en señal de protesta, se quitaron sus saris y los usaron como armas, arrojándolos contra los efectivos policiales y quedando semidesnudas, lo que los hizo huir. Pero el 24 de setiembre de 2008 la policía vino preparada – con la presencia simbólica de sólo dos mujeres policías – y comenzó a insultar a las mujeres y a golpearlas. Éstas ya habían alejado a sus hombres e hicieron frente a la fuerza policial. Los miembros de la Policía y del Departamento Forestal comenzaron a incendiar las cabañas y luego atacaron a las mujeres y las desnudaron.

La lucha por el bosque no ha cesado desde hace algunos años en esta zona, donde la población tribal y dalit y otros sectores pobres, liderados por las mujeres, están defendiendo sus derechos y exigiendo la devolución de la tierra que el Departamento Forestal les quitó ilegalmente después de la independencia. La lucha se intensificó aún más luego de la aprobación de la Ley de Derechos sobre los Bosques de 2006 y, el año pasado, se puso en marcha un gran movimiento en esta región donde miles de hectáreas están ahora en manos de la población tribal. Esto ha provocado un fuerte debate sobre el tema de la reforma agraria en esta zona donde especialmente la casta superior, los sectores de terratenientes dominantes, los señores feudales, los industriales, las mafias y el lobby minero se han sentido amenazados. Ahora intentan por todos los medios sabotear ese movimiento.

La disputa territorial en la zona se ha hecho famosa a nivel nacional. Todas las comisiones formadas para resolverla han informado detalladamente que las tierras tribales fueron robadas. Los informes mencionan también que esas tierras fueron transferidas a personas externas a la zona, que todavía las conservan. Más tarde, varias comisiones también han informado que las principales causas del crecimiento de la actividad maoísta en la zona eran las disputas por la tierra, la no implementación de una adecuada reforma agraria y la apropiación de la tierra por parte de terratenientes, señores feudales y sectores de las castas altas de la sociedad. Sin embargo, el movimiento por la tierra ha movilizó a la región.

Ese movimiento espontáneo organizado por los pobres de la zona se ha vuelto un desafío para las autoridades administrativas, especialmente para la Policía y el Departamento Forestal, que prefieren que las actividades maoístas continúen. En efecto, sería fácil para ellos aplastar el movimiento popular con la excusa de que se trata de un problema de orden público y, además, porque así pueden acceder a los abundantes fondos disponibles para eliminar a los maoístas. Este movimiento ha hecho disminuir la actividad maoísta y el gobierno debe ahora enfrentarse al incómodo problema de resolver – contra sus deseos – el tema de las tierras y los bosques.

En vista de la gravedad de los hechos ocurridos, hemos planteado los reclamos siguientes:

1. Debe realizarse una investigación judicial de alto nivel, como asegurara el Magistrado del Distrito, Sr. Ajay Shukla.

2. Todos los funcionarios que participaron en el incidente deben ser sancionados y suspendidos.
3. Los aldeanos que instigaron la violencia entre castas deben ser arrestados y juzgados en base a la Ley de Castas y Tribus Registradas, por violación de derechos humanos y violencia contra las mujeres.
4. Debe aplicarse La Ley de derechos de los bosques de 2006 respetando su espíritu.
5. Debe organizarse un diálogo de alto nivel para resolver el problema de las tierras en disputa en la región de Kaimur.

Por Roma, NFFPFW (Kaimur) / Human Rights Law Centre, e-mail: romasnb@gmail.com

[inicio](#)

- México: masacre contra indígenas y campesinos que resguardaban autónomamente sus territorios

La organización Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. informa en un comunicado emitido recientemente, que el pasado 3 de octubre se llevó a cabo, de forma por demás ardua, brutal y violatoria de los más elementales derechos humanos, individuales y colectivos, un operativo policiaco de carácter federal y estatal, en contra de la población indígena y campesina tojolabal de la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria, Chiapas. La referida comunidad mantenía bajo su administración, desde el siete de septiembre de este año, la zona arqueológica y ceremonial maya de Chinkultic.

Este operativo fue realizado por centenares de agentes de la Policía Ministerial, Agencia Federal de Investigación (AFI) y Policía Estatal Preventiva (PEP) quienes ingresaron al poblado en vehículos, a caballo y a pie. En el poblado encontraron la resistencia de hombres, mujeres y niñas-os, a lo cual las fuerzas represivas reaccionaron –según reportes de periodistas testigos- con saña, “golpeando indiscriminadamente a niños, mujeres y personas de la tercera edad, dándole el tiro de gracia a tres heridos de gravedad y asesinando a un conductor que los trasladaba a un hospital en Comitán”.

La acción represiva ejercida en contra de la comunidad de Miguel Hidalgo se complementó con otra, desarrollada horas antes, en contra de grupos indígenas tojolabales de las comunidades de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, quienes también desde principios de septiembre pasado, habían tomado pacíficamente el acceso al Parque Nacional Lagunas de Montebello, controlado y administrado hasta entonces por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

El saldo de estos actos de fuerza desmedida contra población civil fue de al menos seis muertos y dos decenas de heridos, además de más de cincuenta personas detenidas.

Con esta represión, el Estado mexicano (gobiernos federal y estatal) les ha violentado flagrantemente, a hombres, mujeres y niñas-os atacados, no sólo sus derechos humanos individuales, relativos a la integridad y a la vida -consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles-; sino también sus derechos como indígenas, respecto al territorio y a recuperar, resguardar y administrar su patrimonio natural y cultural ancestral, tal como lo reconoce la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 11) y el Convenio 169 de la OIT (artículo 14) como bien han señalado ya, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Internacional de Observación por los Derechos Humanos.

Este brutal operativo represivo y esta masacre constituyen un hecho deleznable y se impone la justa exigencia de justicia y castigo ejemplar no solamente de los autores materiales sino también y sobre todo a los autores intelectuales que dieron las órdenes desde el más alto nivel.

Sin embargo, esto no es sino una muestra del tipo y magnitud de los intereses que están detrás de la ambición de apoderarse, de forma privatizada y con fines de lucro multinacional, de los territorios indígenas y campesinos de Chiapas y del Sureste del país, ricos en recursos naturales de carácter estratégico (biodiversidad; recursos genéticos; agua dulce no contaminada y caudales potencialmente productores de hidroelectricidad; viento –como energía eólica- y cubierta forestal que captura carbono) así como también poseedores de inigualables bellezas escénicas y Centros ceremoniales sagrados –que no “ruinas”- y arqueológicos.

Sólo que, en este caso, la saña demostrada en Chinkultic por el operativo oficial pareciera una señal de que fue ejecutado como un

escarmiento ejemplar cuya finalidad sería la de debilitar y desmoronar posibles resistencias y nuevos intentos indígenas que –sin importar su filiación política: zapatistas, perredistas ó priistas/panistas- pretendan defender, recuperar, resguardar y administrar autónomamente su patrimonio cultural y natural, para, de esta forma, garantizarle a la inversión privada multinacional (léase, entre muchas otras: Monsanto; Sanofi Aventis; Glaxo; Ford Motors Co.; Iberdrola; Repsol; Fems-Cocacola; Grupo Carso; hoteleras Meliá; Riu y Barceló) la “tranquilidad social y política” que vienen exigiendo sin duda cada vez con mayor impaciencia.

Es por ello que en éste, como en otros casos semejantes en Chiapas y en el resto del país, lo que está en juego no son únicamente los derechos, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas y comunidades en lucha y resistencia, sino los derechos de todo el Pueblo mexicano en su conjunto y la soberanía misma de nuestra Nación.

Artículo basado en información obtenida de: “Comunicado de Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.”, correo electrónico: m_a_zules@hotmail.com, www.maderasdelpueblo.org.mx, enviado por Miguel Angel Garcia Aguirre.

[inicio](#)

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Brasil: pescadores afectados por Aracruz Celulosa cierran puerto privado de la empresa

Una fábrica de celulosa altera profundamente la micro-región donde se instala y genera una serie de problemas que afectan principalmente a las poblaciones tradicionales.

Aracruz Celulose S.A. (ARCEL) construyó la unidad Barra do Riacho, en el estado de Espírito Santo, en el lugar donde antes se alzaba la aldea indígena de Macacos. La construcción de esta planta de celulosa atrajo una gran cantidad de trabajadores de otras regiones y estados, lo que acarreó muchos trastornos al barrio vecino llamado Barra do Riacho, que era básicamente un barrio de pescadores y está situado a un kilómetro de la fábrica. Este barrio pasó abruptamente de 900 a 10.000 habitantes. Hasta hoy, Barra do Riacho sufre las consecuencias: altos índices de desempleo, prostitución infantil y tráfico de drogas.

A eso se suma que para garantizar la cantidad de agua suficiente para abastecer el consumo exorbitante que necesita la fábrica para la producción de celulosa –una demanda equivalente al consumo de agua de una ciudad de más de 2 millones de habitantes-, ARCEL cerró la salida al mar del río Riacho y lo desvió, además de otros cuatro ríos de la región, provocando su sedimentación.

Esto perjudicó enormemente a los pescadores de Barra do Riacho y Barra do Sahy, quienes han venido reclamando reiteradamente a ARCEL que atienda sus reivindicaciones legítimas, insistentemente ignoradas por la empresa.

Finalmente, el 10 de octubre de 2008, más de 100 pescadores de la Asociación de Pescadores de Barra do Riacho y Barra do Sahy, cerraron durante todo el día el acceso por tierra al puerto Portocel, el puerto privado de ARCEL, impidiendo la entrada de celulosa destinada a exportación.

Los pescadores presentaron una larga lista de reivindicaciones a la empresa y a la Municipalidad de Aracruz, dentro de las cuales la principal es “la apertura inmediata de las cuatro compuertas construidas por ARCEL en el río Riacho para aumentar su volumen de agua, pues el cierre ha disminuido la cantidad de agua, provocando la sedimentación del río y el cierre de la boca de la barra”.

El cierre de la boca de la barra deja a las familias pescadoras en situación desesperada porque impide la salida de sus barcos a alta mar (y el regreso), dificultando cada vez más la subsistencia de las personas que dependen de la pesca. Por otro lado, los buques cargados de celulosa para producir papeles descartables en Europa, Estados Unidos y Asia, no han dejado de salir del puerto Portocel.

Los pescadores exigieron la presencia del alcalde de la ciudad, Ademar Devens, quien compareció en el lugar y al ver la situación de la boca de la barra resolvió elevar las reivindicaciones de los pescadores a la empresa. La empresa informó a los pescadores que estaba dispuesta a abrir las cuatro compuertas en el río Riacho siempre y cuando la marea bajara, en el entendido de que eso facilitaría el proceso de apertura de la boca de la barra.

Con la promesa de la apertura de las compuertas los pescadores resolvieron retirarse hasta el resultado de una próxima reunión con la municipalidad y la empresa, donde se evaluará la situación y se discutirán otras reivindicaciones. En función de eso decidirán si realizan nuevas acciones. Ya están cansados de promesas y medidas que no resuelven el problema.

Resulta irónico que la empresa les haya pedido "comprensión" a los pescadores por las dificultades que viene enfrentando: falta de agua en la fábrica por una seca prolongada en la región –situación agravada por las plantaciones de eucalipto de la propia empresa- y una "situación financiera difícil" por la suba del dólar –aunque es de conocimiento público que ARCEL realizó operaciones financieras de carácter especulativo que resultaron en pérdidas millonarias.

¿Y la comprensión para con los pescadores y la angustiada situación en que los deja no poder pescar y atender sus necesidades básicas?

Artículo basado en información obtenida de: "Pescadores fecham porto de exportação da Aracruz Celulose", Winnie Overbeek, Rede Alerta contra o Deserto Verde, enviado por el autor, correo electrónico: woverbeek@terra.com.br; "Promesas de empleo y destrucción del trabajo. El caso Aracruz Celulose en Brasil", Alacir DeNadai, Winfridus Overbeek, Luiz Alberto Soares, 2005, <http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/faseESP.pdf>

[inicio](#)

- Indonesia: los impactos de una fábrica de celulosa sobre la salud de la población local

Han pasado 63 años desde que Sukarno proclamó la independencia de la República de Indonesia, el 17 de agosto de 1945. Cada mes de agosto, y especialmente el día 17, los indonesios de todo el archipiélago celebran el aniversario de la nación.

Lamentablemente, para la gente de Siantar Utara, del Municipio de Toba Samosir, en la región de Siruar del Norte de Sumatra, será imposible celebrar. Casi todos los miembros de las aproximadamente 300 familias de la localidad sufren una enfermedad de la piel muy urticante y dolorosa. Se sospecha que esta enfermedad es provocada por los desechos de la fábrica de celulosa Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Hace pocos días los habitantes de Siruar vinieron a dialogar con la empresa; trajeron a sus niños, cuya piel supura en todo el cuerpo a causa de la enfermedad, especialmente en las caderas.

Con lágrimas en los ojos, el reverendo Sumurung Samosir y su esposa Indira Simbolon fueron testigos del dolor de sus hermanas y hermanos de Siruar. Dimpos Manalu, asistente social y joven intelectual del Norte de Sumatra, que trabaja con personas marginadas de la región, estaba profundamente conmovido. Los tres quedaron sin palabras ante el sufrimiento de esas personas. Había bebés con pústulas en la cabeza; una mujer de mediana edad dijo que todas las mujeres de Siruar tenían eccemas dolorosos pero que les avergonzaba demasiado mostrarlos. En respuesta a esta afirmación, otra mujer se sinceró y dijo que su esposo también sufría de esa enfermedad de la piel, principalmente en la cadera y en los genitales.

Indira Simbolon pudo fotografiar a una mujer que tiene toda la piel del cuerpo muy afectada, con abscesos en los muslos, las caderas, las nalgas, el vientre, el pecho y la espalda. Muchos hombres dijeron que también ellos tenían abscesos dolorosos en las caderas y los genitales.

Paradójicamente, unos pocos días antes el Ministro del Medio Ambiente había entregado a PT TPL un premio por el buen manejo ambiental que tenía la empresa.

El representante de PT TPL Leo Hutabarat me dijo que la enfermedad de la piel de los habitantes de Siruar no tenía nada que ver con la empresa. ¿No es curioso que PT TPL no haya traído a un médico para atender a la gente de Siruar? ¿No equivale esto a admitir lo que intentan negar? Desde el comienzo, PT TPL ha tenido una actitud ambivalente. Siempre que hubo diálogos en los que participaban muchas personas habló con cortesía pero, en la práctica, se comporta con arrogancia. Se mantiene a distancia de la gente del lugar. Algunos periodistas y yo pudimos comprobarlo. Estábamos cerca de la orilla del río donde se vierten los desechos de

la compañía. Un empleado de PT TPL nos acompañaba, y nos dijo que la empresa no había dicho la verdad. Vierten los desechos temprano en la mañana, en general cuando llueve. Se las arreglan para que todo esté en orden cuando saben que vienen invitados, sobre todo si vienen de Yakarta. Hicieron todo lo posible para que la fábrica no oliera tan mal. Traen médicos cuando la gente se enoja por lo insoportable de la situación, especialmente por los problemas de salud.

En el lugar del río donde PT TPL vierte los desechos, el agua está sucia y marrón, en cambio, se ve limpia en otra zona un poco más alejada de la empresa. El personal de PT TPL que vino a hablar con nosotros dijo: "Muchos peces mueren súbitamente en las cercanías de PT TPL". "He sido agricultor durante mucho tiempo", dijo otra persona de Siruar, "y nunca vi que el banano muriera antes de dar fruto". Señaló hacia un banano que estaba muriendo: "Miren esos bananos. Tienen las hojas marchitas, aunque todavía son jóvenes".

La gente se siente impotente, pero a nadie parece importarle. Quienes trabajan en el dispensario son también funcionarios públicos y no informan sobre los problemas de salud que sufre la población a causa de la empresa. ¿Cómo pueden permanecer callados?

PT TPL ha tenido enormes ganancias pero las obtuvo a expensas de la gente.

Habría que tomar medidas importantes y concretas para lidiar con este problema: el gobierno debería formar un equipo independiente que investigue sobre la enfermedad de la piel de los habitantes de Siruar, mientras que PT TPL debería reconocer que su tratamiento de los efluentes no es ambientalmente apropiado; quizás PT TPL debería dejar de funcionar. El sufrimiento de los pobladores de Siruar es una tragedia humana de la que todos debemos ocuparnos; todos los que estamos de su lado deberíamos tomar medidas y brindarles nuestro apoyo.

Por Gurgur Manurung, especialista en medio ambiente, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Yogyakarta, UNJ. E-mail: gurgurmanurung@yahoo.com. (Artículo traducido del indonesio al inglés por Limantina Sihaloho).

inicio

- Malasia: niños y trabajadores inmigrantes indonesios esclavizados en plantaciones de palma aceitera

Las empresas plantadoras de palma aceitera están haciendo fortunas en Malasia, principalmente gracias al auge actual del agrocombustible, pero nada de esto llega a quienes a costa de su sangre y sudor, hacen que el dinero fluya de esas plantaciones (ver Boletín N° 134 del WRM). Los trabajadores inmigrantes venidos de Indonesia parecen ser unos de los que salen peor librados.

En las 103 o más plantaciones de palma aceitera de Sabah trabajan unos 200.000 trabajadores inmigrantes legales, así como 134.000 inmigrantes indonesios considerados ilegales. Un artículo de Erwilda Maulia publicado por The Jakarta Post el 17 de setiembre de 2008 informa sobre "prácticas de esclavitud" en las plantaciones de palma aceitera de Sabah, Malasia. La Comisión Nacional de Protección a la Infancia reveló que miles de trabajadores inmigrantes indonesios y sus hijos han sido "sistemáticamente esclavizados".

La denuncia provino de un grupo de maestros locales indonesios, quienes informaron sobre "un supuesto caso de explotación infantil y varios casos de acoso físico y sexual de hijos de empleados inmigrantes indonesios". También dijeron que "hay niños de entre seis y 18 años de edad que trabajan durante horas juntando en bolsas las semillas de palma desparramadas por el suelo, a cambio de un pago mínimo. Quienes los obligaban a trabajar eran los administradores de la plantación, y a veces, los propios padres".

Arist Merdeka Sirait, miembro de un equipo de investigación enviado a las plantaciones de Sabah, dijo: "Los ubican en barracas aisladas sin acceso a ningún transporte, con lo cual no tienen posibilidad alguna de abandonar las plantaciones. Tampoco disponen de agua limpia, de luz ni de otras instalaciones".

Según el artículo, Arist dijo que hay unos 72.000 hijos de inmigrantes indonesios trabajando en las plantaciones de Sabah, sin horario reglamentario, es decir que trabajan todo el día. No se les da ningún documento de identidad ni certificado de nacimiento, lo cual en los hechos equivale a negarles, entre otros derechos, el de recibir educación formal.

"Llamamos a esto 'trabajo no remunerado' (como forma de pago de una deuda, en lugar de pagar con dinero o en especie), pero es

una variante moderna de la esclavitud", añadió Arist. Según él, el 'trabajo no remunerado' es común en todas las plantaciones, y las autoridades malayas permiten deliberadamente que persista esa situación.

Para las empresas ambiciosas resulta muy conveniente poder mantener trabajadores "ilegales" y, al esclavizar a sus niños, se aseguran mano de obra barata para el futuro. Para peor, los trabajadores considerados ilegales suelen ser extorsionados por los agentes de seguridad malayos que controlan su documentación, denunció Arist.

El fruto amargo de la palma aceitera parece tener un sabor aún más agrio para los trabajadores de las plantaciones.

Artículo basado en información extraída de: "RI workers, children 'enslaved' in Malaysia, commission says", Erwida Maulia, The Jakarta Post, 17/09/2008, <http://www.thejakartapost.com/news/2008/09/17/ri-workers-children-039enslaved039-malaysia-commission-says.html>.

[inicio](#)

Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques

Este boletín también está disponible en inglés, francés y portugués

Editor: Ricardo Carrere

Movimiento Mundial por los Bosques

Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay

tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985

wrm@wrm.org.uy

<http://www.wrm.org.uy>



